

PROCESO AUTONÓMICO Y CAMBIO SOCIAL EN ASTURIAS

Rodolfo Gutiérrez
Universidad de Oviedo

Este artículo examina, en primer término, algunos de los aspectos del proceso de modernización socioeconómica de la región asturiana y valora el alcance del desarrollo del poder autonómico como instrumento de cambio social en las dos últimas décadas. En segundo lugar, se ofrecen algunos indicios y argumentos a favor de la consideración de procesos específicamente sociales, particularmente del capital social, como factores independientes y explicativos de los balances que puedan hacerse de la modernización socioeconómica y de los logros del proceso autonómico. El conjunto de este trabajo tiene un tono que no le permite reclamar plenamente el atributo de análisis sociológico. En él predominan las consideraciones y reflexiones sobre las evidencias empíricas, y ambas están basadas en la utilización e interpretación de unas pocas referencias de otros trabajos más que en un seguimiento sistemático de los principales componentes del cambio social asturiano.

Palabras clave: cambio social, política regional, capital social.

Las imágenes y los debates sobre la sociedad asturiana de finales del último cuarto del siglo XX han girado sobre dos temas: su peculiar proceso de modernización socioeconómica y el supuesto bajo rendimiento del sistema político autonómico respecto a esa modernización. Uno y otro tema se repiten en contextos públicos y privados como esquemas con los que interpretar el grueso de acontecimientos relevantes sobre la sociedad asturiana y su evolución más reciente. El desarrollo del proceso autonómico y de sus instituciones ha ido reforzando la relación causa-efecto entre ambos temas, de manera que es cada día más frecuente el atribuir a las debilidades del sistema política regional todos los déficits recientes de modernización socioeconómica.

El tema de las peculiaridades de la modernización socioeconómica de Asturias sirve para interpretar el devenir completo de la Asturias contem-

poránea y se ha convertido ya en un rasgo básico de la propia identidad colectiva regional. Más recientemente, se ha supuesto que las singularidades de ese modelo han extendido sus efectos a este período y han seguido condicionando y explicando el tipo y la intensidad del cambio social de estos años. Se coincide en el diagnóstico de que el predominio de las industrias básicas, la extensión de las formas de gestión fordista del sistema productivo y la fortaleza de los grupos de intereses propios de unas y otras han impregnado al conjunto de la sociedad y han limitado la capacidad de la sociedad asturiana para transitar hacia fases más actuales de modernización. Los diagnósticos o balances sobre las principales dimensiones del cambio social de los últimos veinte años siempre se rematan con una sombra de incompleta realización del segundo término de cualquiera de los siguientes pares de metáforas: sociedad industrial/postindustrial, economía en declive/reindustrialización, economía cerrada/abierta, sociedad local/global (García Blanco y Gutiérrez, 1989, Köhler, 1996 y García Blanco, 1998).

La consolidación y el papel del poder autonómico se han convertido también en un tema central con el que hacer el balance de esta etapa. La plena coincidencia temporal de ambas secuencias de hechos, la crisis del modelo económico tradicional y el desarrollo de las instituciones autonómicas, han contribuido al predominio de una ambivalente mirada sobre esas instituciones y sobre sus comportamientos. El poder autonómico es, en las percepciones más compartidas, el recurso más reclamado para influir en la dirección del cambio social en una fase tan crítica y, al tiempo o por lo mismo, en un recurso valorado siempre como insuficiente o ineficaz.

Es comprensible que la mirada global de la sociedad asturiana de este periodo se haya centrado en esos dos temas y en esa supuesta relación de causa-efecto entre ambos. Los cambios en la estructura económica regional son de un envergadura y de una profundidad extraordinarias. El desarrollo de instituciones de autogobierno hace que sean vistas como el principal recurso de acción colectiva para orientar esos cambios económicos, más aún cuando eso ocurre en un contexto de intensa mundialización. Pero esa mirada que da el protagonismo del cambio social a la vida económica y a la vida política es una mirada sesgada, que deja a la sociedad y a los factores específicamente sociales fuera del propio análisis. Aunque algunos trabajos han intentado ocuparse específicamente de la "lógica social" de las transformaciones económicas de Asturias (Gutiérrez, 1992), los factores exógenos a la vida económica y política (como las estructuras familiares, la organización territorial, las ideologías o mentalidades colectivas, el llamado capital social, la composición y el comportamiento de las élites sociales) que pueden haber resultado determinantes de la intensidad y la dirección del cambio socioeconómico en las Asturias reciente, apenas han sido analizados sistemáticamente.

Este artículo se propone, en primer lugar, proporcionar algunos matices sobre la modernización socioeconómica y sobre el desarrollo del poder autonómico como guías del cambio social en las dos últimas décadas. En segundo lugar, se ofrecen algunos indicios y argumentos a favor

de la consideración del rocesos específicamente sociales, particularmente del capital social, como factores independientes y explicativos de los balances que puedan hacerse de la modernización socioeconómica y de los logros del proceso autonómico. El conjunto de este trabajo tiene un tono que no le permite reclamar plenamente el atributo de análisis sociológico. En él predominan las consideraciones y reflexiones sobre las evidencias empíricas, y ambas están basadas en la utilización e interpretación de unas pocas referencias de otros trabajos más que en un seguimiento sistemático de los principales componentes del cambio social asturiano.

1. TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DINAMISMO SOCIAL

La imagen sociológica que se puede proporcionar de la Asturias en la que se inicia el proceso autonómico estaba todavía dominada por esas peculiaridades tan marcadas de su estructura socioeconómica, aunque las singularidades ya no eran tantas como parece suponerse. Asturias era vista, en esos momentos, como una "sociedad postindustrial incompleta". En un trabajo anterior (García Blanco y Gutiérrez, 1988) se fijaban esas peculiaridades en sus principales rasgos: la dinámica demográfica, el proceso de urbanización, la estructura de clases sociales y la estructura familiar.

Asturias había experimentado más tempranamente que el conjunto de España las dinámicas de cambio demográfico más dominantes en la segunda mitad del siglo XX. En Asturias se han producido los descensos de la mortalidad y de la natalidad con diez-quince años de anticipación (la mortalidad entre 1940 y 1955, la natalidad entre 1960 y 1970) sobre los promedios del país. Por esa anticipación, y por las tendencias de declive económico ya presentes en los años setenta, la población asturiana de los primeros ochenta presentaba síntomas de declive y niveles relativamente altos de envejecimiento. En definitiva, parecía que la demografía asturiana no respondía al "dinamismo postindustrial" de la España de los ochenta.

Las tendencias demográficas de los últimos veinte años no han variado sustancialmente los rasgos diferenciales de la demografía regional, principalmente en lo que se refiere a la superior caída de la natalidad y al más intenso ritmo de envejecimiento. Pero también es cierto que esas dinámicas son comunes al conjunto de la población española, y que, en ese sentido, Asturias no muestra tendencias muy divergentes, como lo prueba el que desde 1999 se registre una recuperación de la natalidad y de la nupcialidad en una línea similar a la del resto del país. En todo caso, el resultado más neto de todo el período es mucho menos negativo de lo que diversas fuentes habían pronosticado, y la población asturiana, que tenía 1.129.556 habitantes en 1981, su cifra más alta en todo el siglo, mantenía 1.076.567 habitantes en el año 2000.

Lo que había sido, también, un proceso temprano de urbanización en los años cincuenta y sesenta parecía frenado en la década siguiente. En el

período intercensal de 1970-1981, el área urbana central, la comprendida por los municipios de Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo y Mieres, sólo pasó de un 52% a un 57% en lo que era su participación en el conjunto de la población de Asturias. Más allá de la propia aritmética de la distribución territorial, esa pérdida de ritmo del proceso de urbanización, acompañado por todos los síntomas de crisis industrial, producía una fuerte sensación de estancamiento social en todos los núcleos urbano-industriales de la costa y de las cuencas mineras, y se constituía como un factor decisivo en la configuración de una cultura regional del declive.

La Asturias actual muestra una estructura territorial sobre la que se puede afirmar que ha desaparecido la dualidad rural/urbana que todavía estaba presente hace veinte años. Asturias es ahora una sociedad plenamente urbana con niveles y perfiles de singular importancia. Es ya intensamente urbana, como lo muestra que el área central de la región se haya convertido en la sexta área urbana de España. Fuera de esa área central, en las llamadas "alas" oriental y occidental, es también claro el predominio de las cabeceras comarcales de tamaño medio y de carácter semiurbano, quedando los núcleos propiamente rurales reducidos a algo menos del 5% de la población regional. La propia configuración de los núcleos urbanos de esa área central ha variado significativamente: ahora la composición social de cada uno de esas áreas locales es mucho más diversa que la composición especializada (minera, industrial o de servicios) que era tradicional; al tiempo, se han formado desarrollos suburbanos importantes, principalmente en el entorno de Oviedo. Y lo que es más importante, en esa reforzada área urbana central de Asturias el nivel de interacciones sociales de todo tipo va muy por delante de las adecuadas estructuras administrativas y de las políticas de ordenación del territorio y de provisión de los principales equipamientos colectivos.

La composición por clases sociales ofrecía aún el perfil de una sociedad "precarimente postindustrial": Asturias era hace veinte años más obrera, menos de nuevas clases medias y más campesina que la sociedad española en su conjunto, aunque esas diferencias se ofrecían en proporciones no demasiado significativas. En 1981 la clase obrera asturiana representaba el 48% de la población, tan sólo cuatro puntos más de lo que representaba la clase obrera en el conjunto de la población española; esas cifras eran, respectivamente, del 20% y el 26% en las clases medias profesionales y del 12% y el 7% en el campesinado. Lo que sí era resultaba más significativo, era que la estructura de clases se hacía postindustrial a un ritmo marcadamente menor que en el conjunto de España, como se reflejaba en el hecho de que las clases medias profesionales de la región hubieran incrementado su peso relativo tan sólo en 5 puntos en la anterior década (eran el 15% en 1970) cuando en España habían aumentado en 9 puntos (eran el 17% en 1970).

Mucho más significativo desde el punto de vista de la dinámica de clases era la espectacular mejora de niveles relativos de renta que había experimentado la clase obrera asturiana en la etapa inmediatamente anterior: en 1964, sobre una media regional 100, un hogar de clase obrera tenía en Asturias ingresos por valor de 77, un hogar de clase media ingresaba por valor de 148 y un hogar encuadrado en las llamadas élites

profesionales disfrutaba de ingresos por valor de 314; en 1981, estas cifras relativas de ingresos había pasado a ser de 106 para la clase obrera, de 141 para las clases medias y de 237 para las élites.

Aunque carecemos de un análisis reciente de la composición por clases que permita observar los cambios de este periodo, no es difícil atisbar la dirección de algunos de estos cambios. La estructura de actividad económica y los modelos de gestión productiva son ahora plenamente análogos con los del conjunto de España, por lo que hay que suponer que la estructura de clases ha perdido, tanto en composición como en niveles relativos de bienestar, el grueso de aquellos rasgos diferenciales. Esos cambios han dado a la clase obrera asturiana unos contornos muy alejados de aquellos que han marcado la Asturias industrial durante décadas: baste señalar que en el ranking de las profesiones con mayor volumen de empleo en esos segmentos sociales (Sadei, 2000) ya no estaban en 1996 los mineros ni los obreros metalúrgicos, sino que aparecía los "dependientes de comercio y asimilados", con 23.683 personas, los "trabajadores de la hostelería", con 6.076 personas, y los "conductores de vehículos", con 5.589 personas (Sadei, 2000).

Un rasgo de singular importancia de la Asturias de los primeros ochenta lo constituía el predominio de estructuras familiares tradicionales en lo que se refiere a su relación con la actividad económica. En 1981, tan sólo algo más de una tercera parte de los hogares asturianos (el 38%) eran hogares con más de un preceptor de rentas; una cifra muy similar a la del País Vasco (el 39%), ligeramente inferior a del conjunto de España (el 42%), pero bastante más lejos de las de Cataluña (el 51%) y la Comunidad Valenciana (el 49%).

Tampoco se conocen con detalle los cambios en las estructuras familiares y las transformaciones sufridas por aquel predominante modelo de familia tradicional de un solo preceptor de rentas. De algunos otros hechos, como la bajísima natalidad o el retraso en las edades medias de la maternidad, se pueden deducir las mayores resistencias en la sociedad asturiana a facilitar la formación de familias jóvenes con una inserción laboral temprana y estable de ambos miembros de la pareja, algo claramente relacionado con la menor presencia de familias de doble renta.

Con estas pocas referencias se puede atisbar la magnitud de la transformación socioeconómica de Asturias en este periodo. La crisis de la agricultura y de la industria tradicional, el acompañamiento de importantes fondos económicos europeos y españoles para aliviar los efectos de esas crisis, junto a algunas capacidades propias de revitalización de la economía regional han protagonizado decisivamente esa transformación. Ese gran cambio va claramente en la dirección de la convergencia con las estructuras socioeconómicas del conjunto de España y de Europa. En pocas piezas de la estructura socioeconómica se pueden encontrar ahora rasgos muy peculiares de la sociedad asturiana respecto a la sociedad española. Es bastante seguro también que las principales tendencias de la desigualdad social y los principales problemas de exclusión tengan perfiles ahora muy similares entre Asturias y España

Esa gran transformación y esa convergencia de las estructuras socioeconómicas no acaban, sin embargo, de dar todos los frutos esperados. Junto a ese proceso de "homologación" de la estructura social, hay, también, una constante debilidad de los más importantes indicadores de dinamismo socio-económico, que sólo en los años más recientes muestran señales de modificarse. Aunque las estructuras socioeconómicas reproducen las pautas dominantes en España y en Europa, los síntomas de una especie de "esclerosis socioeconómica" siguen atenazando a la sociedad asturiana. Esos síntomas son de singular importancia en aspectos tan cruciales del cambio social como la propia creación de riqueza, la participación en el mercado de trabajo y la disposición de recursos de innovación tecnológica. En todos esos terrenos, plenamente expresivos del dinamismo socioeconómico de un territorio, el balance de la última década es bastante precario:

a) Los indicadores más sobresalientes de creación y distribución de la riqueza colocan a Asturias en posiciones relativas muy bajas en el conjunto de España: el crecimiento acumulado del PIB entre 1995 y 2000 en Asturias fue de 15,4%, 5 puntos por debajo del crecimiento español y entre 9-10 puntos menos que las regiones con crecimientos más altos como Canarias, Murcia, Madrid y Valencia. También el indicador de recursos económicos en manos de las familias mostró un comportamiento comparado similar, de modo que la renta disponible bruta de los hogares aumentó un 23,9% en España entre 1995 y 1999, mientras que en Asturias aumentó sólo un 18%, siendo la Comunidad Autónoma con menor incremento en esa etapa; Asturias fue también la región con el aumento más bajo en el gasto en consumo final de los hogares.

b) En cuanto a desarrollo y participación en el mercado de trabajo, Asturias ha ofrecido resultados muy bajos. Se mantienen tasas de empleo (porcentaje de ocupados sobre población mayor de 16 años) con diferenciales muy significativos: en el año 2000 la tasa de empleo de Asturias era de 36,2, sensiblemente inferior a la cifra de 44,1 del conjunto de España. La importancia de ese diferencial se puede apreciar mejor señalando que si Asturias tuviese la tasa de empleo del País Vasco (45,7), una región similar en tradición industrial y en estructura demográfica, supondría una cifra adicional de 87.000 ocupados, cantidad que está por encima de los 68.000 parados que estimaba la EPA para ese año. También en la relación entre personas ocupadas y dependientes se muestran esas tendencias: el total de cotizantes a la Seguridad Social aumentó, entre 1991 y 2001 en un 23,9% en España y tan sólo en un 4,5% en Asturias; aunque la evolución del número de pensionistas fue más similar (incrementos de 22,7% en España y 15,2% en Asturias), la ratio regional de cotizantes/pensionistas sigue aún por debajo del de hace diez años, 1,34 entonces y 1,21 ahora, cuando en España ha podido recuperarse y pasar de 2,02 a 2,04.

c) La dotación de capital científico y tecnológico ofrece niveles muy inferiores al potencial económico de la región. La población asturiana representa el 2,7 de la población española y su economía el 2,5% del PIB del país; pero Asturias sólo participa en el 1,5% gasto total en actividades de investigación y desarrollo tecnológico (I+D). Estas actividades se han mantenido a lo largo de los años noventa en cifras de gasto que suponen

entre el 0,5-0,6% del PIB regional, un nivel de esfuerzo que se sitúa en torno a las dos tercios del promedio del que se realiza en España y en un cuarto del que se realiza en Francia o Alemania. Los indicadores de penetración de algunas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) a las que se supone un papel difusor de innovaciones técnicas y sociales ofrecen cifras de distancias algo menores: en el año 2000 un 27% de hogares españoles disponía de ordenadores personales frente a un 26,4% de hogares asturianos; la penetración de Internet hacía a Asturias más similar al conjunto del país, con un 19,1% y un 20,3% de población usuaria de ese recurso en el año 2001 respectivamente; aunque Asturias se distanciaba de la región con más penetración de estos recursos (Cataluña) en 11 puntos porcentuales en PCs y en 5,7 puntos en Internet.

Bien es cierto que algunos de estos indicadores han coincidido en ofrecer resultados significativamente mejores en los dos o tres últimos años: Asturias muestra en 1999 y 2000 cifras de incremento del PIB, de reducción del desempleo, de incremento de ocupados y cotizantes a la Seguridad Social, de expansión del acceso a algunas TICs y de gasto en actividades de I+D+I en magnitudes que se acercan, e incluso superan en algunos casos, a los promedios españoles. El tiempo irá determinando si se trata, como parece, de un cambio de tendencia en esos importantes indicadores o si se trata de un cierto retraso en los impactos del ciclo español.

2. ESTABILIDAD Y RENDIMIENTO DEL PROCESO AUTONÓMICO

La estructura social asturiana ha completado en las dos últimas décadas una profunda transformación, perdiendo casi todos los rasgos que la caracterizaban como una "sociedad postindustrial incompleta". A pesar de esa profunda transformación, los principales procesos políticos regionales asociados al desarrollo de la autonomía se han caracterizado por una más que apreciable estabilidad. Ese contraste entre transformación social y estabilidad política puede estar en el origen de síntomas, también bastante estables, de baja valoración del funcionamiento y del rendimiento del proceso autonómico.

La estabilidad de los principales rasgos del sistema político regional es bien evidente en todo lo que se refiere al sistema de partidos y a los comportamientos electorales. Los comportamientos electorales han reforzado la pauta de pluralismo limitado del sistema de partidos, de manera que la presencia dominante de las dos grandes ofertas estatales de derecha e izquierda (FSA-PSOE y AP/PP), junto a la estabilidad reducida pero significativa de PC-IU, han hecho fracasar las diversas intervenciones en la competencia electoral de partidos de centros y de partidos nacionalistas o regionalistas. La propia volatilidad electoral ha sido escasa y las transferencias de votos entre los dos grandes bloques de izquierda y derecha apenas han sido superiores al 6% en ninguna de las elecciones (Rodríguez Buznego, 1998). La pérdida de la superioridad electoral de la izquierda, que anunciaron las elecciones autonómicas de 1995, se

revirtió en las elecciones de 1999 devolviendo el reparto de apoyos a una situación que ha sido constante desde el inicio del proceso autonómico.

Una estabilidad en dosis similares se puede encontrar en la gobernabilidad y en la composición de la clase política regional. A pesar de que las mayorías parlamentarias y las coaliciones o pactos de gobierno han sido poco frecuentes, los ejecutivos autonómicos han ofrecido una apreciable permanencia en sus respectivas legislaturas. Los episodios de crisis de gobierno han sido significativos pero escasos (con un solo cese o dimisión de un presidente), como tampoco han sido abundantes las acciones explícitas de control del gobierno en términos de mociones de censura o cuestiones de confianza. Aunque la figura de los presidentes autonómicos ha sido muy cambiante, con cinco presidentes en todo el período autonómico, el conjunto de la clase política regional parece presentar una movilidad bastante menor. A falta de una comprobación explícita de este asunto, la impresión es que la permanencia en posiciones del conjunto de las actividades políticas de ámbito regional (cuadros de partidos políticos, cargos municipales y cargos en el legislativo y el ejecutivo regional) ha sido relativamente alta.

Junto a estos rasgos de estabilidad y consolidación del proceso autonómico, hay evidencias de comportamientos y actitudes de desafección hacia el proceso autonómico. El síntoma más explícito de esa desafección lo proporciona los bajos niveles de participación electoral en el ámbito autonómico: un 35% en 1983, 33,2% en 1987, 41,2% en 1991, 31,3% en 1995 y un 30,9% en 1999. Sólo gallegos, canarios y vascos, por este orden, se han abstenido habitualmente más que los asturianos en las elecciones autonómicas.

Las evidencias disponibles sobre la satisfacción con el funcionamiento del sistema político autonómico colocan a Asturias en niveles comparados bajos. Con datos de encuestas del CIS de 1992 y de 1998, Mota y Subirachs (2000) ofrecen una serie de medidas de satisfacción ciudadana con el rendimiento del sistema autonómico; en concreto, un *índice compuesto* de satisfacción que contiene una doble dimensión, una que hace referencia a la valoración positiva que hacen los ciudadanos de las instituciones políticas representativas (presidente, gobierno y parlamento), otra que registra el grado de satisfacción individual respecto al funcionamiento de la Comunidad Autónoma en su conjunto. Ese índice alcanza para Asturias la cifra de 27, respecto a una media en todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.) de 35, con sólo dos de ellas, Canarias (24) y Cantabria (20), como únicas CC.AA. con índices de satisfacción más bajos. Los índices de satisfacción de las diversas dimensiones de ese índice compuesto presentan los siguientes resultados respectivos de Asturias y de media de las diecisiete CC.AA.: la satisfacción con el presidente es de 24 y de 41, con el parlamento de 25 y de 23, con el gobierno de 28 y de 36, y con el funcionamiento global de la autonomía de 32 y de 42.

De un modo muy similar, y con resultados también del trabajo citado, la legitimidad o el apoyo social al sistema político autonómico, si bien había mejorado en Asturias durante los años noventa, como lo habían hecho en la práctica totalidad de las CC.AA., lo hacía en una intensidad

marcadamente menor: el índice de apoyo social que los asturianos prestaban al sistema autonómico era de 25 en 1992, con una media de 28 para todas las CC.AA.; en 1998 era de 29 en Asturias y de 42 en el conjunto de España, con CC.AA. que no siendo "nacionalidades históricas, como Rioja, Castilla-La Mancha o Extremadura, mostraban índices e apoyo superiores al promedio.

Aproximaciones a la esfera de las mentalidades (Castells, 1994, pp. 119-134) detectan percepciones muy extendidas de atribución a los gobiernos de una destacada responsabilidad en los débiles resultados de la modernización de la economía asturiana y vinculan tales resultados a un par de rasgos del sistema político regional: un déficit permanente de liderazgo político y una subordinación de las instituciones autonómicas a "poderes reales" en el ámbito extraregional (el gobierno central sobremanera) o en el ámbito intraregional de las organizaciones de intereses (los sindicatos especialmente).

3. EL CAPITAL SOCIAL COMO RECURSO CLAVE

Asturias ha vivido una profunda transformación de sus estructuras socioeconómicas en la línea de convergencia con las estructuras predominantes en España y en Europa. Sin embargo, como se ha indicado, esa transformación no se ha visto acompañada de resultados de dinamismo socioeconómico en los niveles que se han observado en ese espacio de convergencia durante la última década. Por otra parte, el poder autonómico ha demostrado una estabilidad del sistema de partidos y de la composición de la clase política que contrasta con los síntomas de desafección y con las pobres valoraciones de su rendimiento que le otorgan los ciudadanos. La suma de ambos procesos produce ese resultado de equilibrio de baja intensidad que caracteriza al conjunto del cambio social de todo este periodo. La modernización socioeconómica ha sido de envergadura pero no ha conseguido generar las estructuras o los incentivos necesarios para un mayor dinamismo social. El sistema político autonómico no es percibido como un agente eficaz para la dinamización socioeconómica pero ha conseguido "blindarse" parcialmente a las insatisfacciones que suscita. La sensación de crisis crónica, tan presente en la mentalidad regional (Castells, 1994, pp. 101-114), es la expresión subjetiva de esa situación objetiva.

La excesiva duración que ha tenido la fase de crisis o estancamiento empuja a sospechar que hay factores explicativos que traspasan las fronteras de las esferas económica o política. Serían rasgos propios del conjunto de la arquitectura social asturiana y no exclusivos de ninguna de sus piezas. En el sentido común, y en muchas de las opiniones que se pueden oír en público, se otorga ese pàpel a factores culturales. Con machacona frecuencia, la explicación última se remite a la "cultura industrial asturiana", entendida como un agregado de creencias, valores y actitudes sobre la vida económica, depositados y arraigados en la población asturiana por décadas de un peculiar modelo de organización económica. Es muy dudo-

so que ese factor cultural sirva para explicar los problemas de modernización socioeconómica de Asturias y sus relaciones con el proceso autonómico. La cultura industrial asturiana es un agregado muy difuso, muy evocado pero muy poco observado, y sobre el que hay indicios bien fundados de que no es tan integra ni tan extendida como se supone. Se puede sospechar mucho sobre la persistencia de una cultura industrial tradicional cuando las estructuras socioeconómicas se han transformado tanto y cuando esa cultura resulta abiertamente disfuncional para orientar percepciones y conductas en el contexto actual.

El llamado capital social puede ser ese factor con capacidad para afectar tanto la esfera económica como la esfera política y con la virtud para acoger dimensiones objetivas y subjetivas de la vida social. El capital social remite a un conjunto de características de la estructura social, tanto subjetivas (valores y normas de confianza) como objetivas (redes sociales), que facilitan la coordinación y la eficacia de acciones individuales y colectivas. Se supone que un par de características de la estructura social, la abundancia de valores y normas de confianza junto a la densidad de las redes sociales de carácter secundario (o de "lazos débiles"), son los mecanismos básicos por los que se potencia la reciprocidad, la coordinación y la cooperación de acciones individuales y colectivas. El capital social, como agregado que recoge ambas dimensiones, tiene aún en su contra las discrepancias sobre el propio concepto (sus dimensiones, variantes y medidas), sobre su formación y sus consecuencias. Pero tiene también muchas razones a su favor, tanto conceptuales como empíricas, que pueden simplemente evocarse, ya que no son objeto de atención directa en este trabajo, en algunas referencias cardinales de la literatura sociológica sobre el tema: el trabajo de Granovetter (1985) sobre la *embeddedness* de la acción económica en la estructura social, el de Gambetta (1988) sobre la confianza y el de Putnam (1993) sobre la positiva influencia del capital social sobre los resultados económicos y la calidad de los gobiernos de las regiones en Italia.

Hay pocas evidencias disponibles todavía para hacer comparaciones entre las CC.AA. españolas sobre la magnitud y la influencia del capital social, pero las pocas existentes parecen consistentes y relevantes (Mota y Subirats, 2000). En ese trabajo, se proporcionan una serie de medidas de varias dimensiones del capital social para el conjunto de las CC.AA. sobre datos de 1998. Asturias no registra niveles altos de capital social en ninguna de las tres dimensiones observadas: el *índice de implicación ciudadana* (un índice compuesto de actitudes y comportamientos relativos a los asuntos públicos), el tejido asociativo en las variantes filantrópico/asistencial y económico/profesional (medido en ratios asociaciones/habitantes) y la participación ciudadana en asociaciones. Y lo que es más importante, los resultados del conjunto de CC.AA. indicaron asociaciones positivas entre el capital social, el nivel de modernización socioeconómica y la satisfacción con el funcionamiento autonómico.

Esas evidencias resultan todavía muy insuficientes para mantener un argumento sólido sobre la relevancia del capital social en la explicación del cambio socioeconómico y del funcionamiento autonómico en Asturias. Habría que comprobar si otras posibles dimensiones del capital

social (por ejemplo, las redes sociales que facilitan la innovación tecnológica o las redes que potencian simultáneamente la acción dentro y fuera de un territorio) presentan niveles comparados similares o si el conjunto de recursos de capital social se han incrementado o disminuido en este periodo. En todo caso, son indagaciones y evidencias que parecen ir por buena dirección en cuanto afecta a la toma en cuenta de factores específicamente sociales para comprender la relación entre la acción política en el ámbito regional y el cambio socioeconómico.

4. ¿CÍRCULO VICIOSO O NUEVO EQUILIBRIO?

Ese ambivalente desarrollo observado tanto en la modernización socioeconómica de Asturias como en la consolidación del poder autonómico, vistos desde la perspectiva del capital social podrían tipificarse como una situación social de *equilibrio de baja intensidad*. En esa situación, la escasez de capital social podría remitir a las causas por las que los prolongados esfuerzos individuales y colectivos están produciendo precarios resultados en la esfera socioeconómica, al tiempo que uno y otro factor son la base de una insatisfacción con el funcionamiento del sistema político que repercute, a su vez, en el propio deterioro de las instituciones autonómicas como principales mecanismos de coordinación y cooperación para la acción colectiva.

Ampliando esa conjetura, es probable que, en condiciones sociales de ese tipo, las acciones dirigidas a revertir esa situación desencadenen y consoliden dinámicas de *círculo vicioso*. Las políticas regionales dirigidas a revertir esa situación, al encontrarse con una escasez de mecanismos sociales de coordinación y cooperación fuera del ámbito político, refuerzan los propios mecanismos de regulación política y, a su vez, hacen más imprescindible reforzar la acción del gobierno en asuntos en los se ha mostrado poco eficaz (García Blanco, 1998). Es probable, también, que el efecto no querido de esa dinámica sea un cierto reforzamiento, independiente el signo político de los gobiernos, de pautas clientelistas en las políticas regionales, al tener que orientarse éstas prioritariamente a regular el acceso de diferentes grupos de intereses a un conjunto cuantioso de ayudas e incentivos al dinamismo socioeconómico.

Ya se ha señalado que hay un grupo significativo de indicadores que se comportan recientemente apuntando un posible cambio de tendencia en la esfera socioeconómica. También hay indicios de estar viviendo una etapa de mayor estabilidad y liderazgo políticos en la esfera regional. Todavía es muy pronto para estar seguros de que se inicia una fase de un nuevo equilibrio de mayor intensidad en las relaciones entre sociedad regional y poder autonómico. En todo caso, ese nuevo equilibrio se encontrará más eficazmente por el camino de la mejora de los instrumentos convencionales del actual sistema político regional que por la vía, superficialmente más atractiva pero de muy dudoso desarrollo, del refuerzo de los elementos culturales identitarios y del reclamo continuo a dosis superiores de autogobierno. Esa vía más convencional

podría verse favorecida por algunos de los desarrollos que se comentan a continuación.

Por un lado, ese nuevo equilibrio requiere un mayor acercamiento de ciertas élites sociales (empresariales, científico-tecnológicas, profesionales) a la formación de la opinión pública y de la propia actividad política regionales. La calidad de la política depende crucialmente de la calidad de la clase política. En ese sentido, una mayor variedad en la composición de la clase política regional es una condición del mayor dinamismo social, por cuanto una mayor participación de grupos políticos no-profesionales puede contribuir a dotar a las políticas regionales una "densidad técnica" y una estabilidad imprescindibles para su eficacia.

Por otro lado, la consolidación del poder autonómico puede estar modificando un rasgo que ha sido dominante en esta etapa. El equilibrio poderes locales/poder regional ha sido más favorable a los primeros. El protagonismo en la orientación de la vida política regional, su propio dinamismo, así como el control de sus rendimientos, han estado más del lado de las ciudades, de las opiniones y los intereses locales que de la débil esfera pública regional. Sin embargo, un equilibrio más favorable a la esfera regional es imprescindible para dotar a las instituciones autonómicas (parlamento y gobierno) de la capacidad efectiva de seleccionar y llevar a cabo "grandes" proyectos regionales. De ahí, también la importancia estratégica de los proyectos de articulación territorial del área central de la región y el encaje, en ese área, de los grandes equipamientos colectivos.

Finalmente, se ha abierto una fase nueva de la política regional con el reciente traspaso de competencias tan importantes como las de educación y las de sanidad. También contribuye a esa nueva fase el que la política regional se adentre con fuerza en ámbitos como los de la innovación o el empleo. Todas esas nuevas responsabilidades políticas, por su mayor proximidad a los ciudadanos, deberían contribuir a neutralizar las tendencias clientelistas que se han comentado. La densidad de competencias y el mayor acercamiento a los receptores directos de las políticas podría tener beneficios tanto en la esfera macropolítica, ayudando a seleccionar esos grandes proyectos regionales, como en la esfera micropolítica, facilitando la función los gobiernos como potenciadores de la sociedad civil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castells, M. et al. (dirs)(1994): *Estrategias de reindustrialización de Asturias*, Editorial Civitas, Madrid.
- Gambetta, D. (1988): *Trust: Making and breaking cooperative relations*, Blackwell, Oxford.
- García Blanco, J. M^a. (1998): "Declive económico y políticas regionales: el caso de Asturias", *REIS*, n^o 83, pp. 87-119.
- García Blanco, J. M^a. y Gutiérrez, R. (1988): "La sociedad", en Varios Autores, *Historia de Asturias. Edad contemporánea III: El franquismo y la transición democrática*, Salinas, Ayalga, pp. 145-197.

- García Blanco, J. M^a. y Gutiérrez, R. (1989): "El declive de las áreas de antigua industrialización: un análisis del caso asturiano", *Sociología del Trabajo*, 8, pp. 3-29.
- Granovetter, M. (1985): "Economic action and social structure: the problem of embeddedness", *American Journal of Sociology*, 91, pp. 481-510.
- Gutiérrez, R. (1992): "La lógica social del declive económico", en Moya, C. et al. (Comps.), *Ensayos de teoría sociológica en homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Köhler, H.-D. (coord.) (1996): *Asturias: el declive de una región industrial*, Ediciones Trea, Gijón.
- Mota, F. y Subirats, J. (2000): "El quinto elemento: el capital social de las Comunidades Autónomas. Su impacto sobre el funcionamiento del sistema político autonómico", *Revista Española de Ciencia Política*, 1-2, pp.123-158.
- Putnam, R. D. (1993): *Making democracy work. Civic traditions in modern Italy*, Princeton University Press, Princeton.
- Rodríguez Buznego, O. (1998): "Elecciones autonómicas, sistema de partidos y gobierno en Asturias", en Alcántara, M. y Martínez, A. (eds.), *Las elecciones autonómicas en España, 1980-1997*, CIS, Madrid, pp. 81-97.
- Sadei (2000): "Los grupos profesionales y técnicos en la estadística de la población de Asturias 1996", *Revista Asturiana de Economía*, nº 18, pp. 225-236.

ABSTRACT

This article describes the main features of socio-economic modernization in the Spanish region of Asturias during the last two decades and assesses the influence of autonomous government to guide and encourage socio-economic change. Some considerations and insights are offered in favour of specific social processes, social capital in particular, as independent factors in explaining the ambivalent balance both of the consolidation of self-government institution and of the scope of socio-economic change. More than a systematic sociological analysis, the article aims to provide a broad assessment of those processes, based mainly on available literature and secondary empirical evidences.

Key words: social change, regional policy, social capital.